

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

Medellín, treinta (30) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por los Magistrados Jaime Alberto Aristizábal Gómez quien actúa como ponente, John Jairo Acosta Pérez y Francisco Arango Torres, procede a dictar sentencia de segundo grado, dentro del proceso ordinario radicado con el número 05001 31 05 010 2019 00575 01 promovido por el señor **FRANCISCO JAVIER MORALES SALAZAR**, en contra de la **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. - PROTECCIÓN**, y la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES**, al cual fue vinculado el **MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO** en calidad de litis consorte necesario por pasivo, con la finalidad de revisar en consulta la sentencia emitida el 14 de diciembre del 2022, por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín, en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

De conformidad con el numeral 1º del artículo 13 de la Ley 2213 de 13 de junio de 2022 “...Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones...”, se toma la decisión correspondiente mediante

providencia escrita número **146**, previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

ANTECEDENTES

El señor Francisco Javier Morales Salazar demandó a Protección y a Colpensiones pretendiendo se declare la ineficacia de su traslado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad administrado por Protección, y como consecuencia, se disponga el restablecimiento de su afiliación al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, administrado por Colpensiones, sin solución de continuidad, la devolución a la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones de todas las cotizaciones y rendimientos de la cuenta de ahorro individual y la validación de estos aportes por parte de Colpensiones. Se condene a Colpensiones a reconocer y pagar la pensión de vejez bajo el régimen de transición del Decreto 758 de 1990, intereses moratorios y/o indexación y costas del proceso.

Como fundamento de sus pretensiones se expuso, que nació el 21 de abril de 1954. Estuvo afiliado al Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones desde el 30 de abril de 1987. Se trasladó a Protección en el 2000. Agrega que la AFP le dio una asesoría incompleta, donde se le indujo en error al omitir información, entre otros aspectos, sobre el capital que se requería en su cuenta de ahorro individual para poder acceder a una pensión anticipada y de mayor valor, asegurando que el Seguro Social se acababa y nadie respondería por las cotizaciones ni por la pensión. Protección le concedió la pensión de vejez en el 2017, sobre 13 sobre mesadas anuales, en cuantía de 1 SMLMV. Aduce que es beneficiario del régimen de transición, por lo que causó su derecho pensional el 21 de abril de 2014, fecha en la cual cumplió 60 años y reunía 1.374 semanas de cotización. Colpensiones mediante comunicado de 12 de agosto de 2019, negó el traslado de régimen argumentando que no es posible porque se encuentra en estado de pensionado por Protección.

En sentencia proferida el 14 de diciembre de 2022, el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín, absolvió a Protección, al Ministerio de Hacienda y Crédito

Público y a Colpensiones de las pretensiones formuladas en su contra por el señor Francisco Javier Morales Salazar, declarando probada la excepción de inexistencia de la obligación, y se abstuvo de imponer costas procesales.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

El apoderado del demandante presentó dentro del término legal escrito de alegatos de conclusión solicitando se revoque la sentencia de primera instancia, reiterando las pretensiones y los fundamentos de derecho expuestos en la demanda. Solicita de acuerdo a los poderes de poder emitir una sentencia ultra petita y extra petita que en caso de no declarar la ineficacia de traslado: Se condene a Protección a pagar a su representado: i) la indemnización de perjuicios materiales por lucro cesante consolidado, suma que deberá ser indexada desde la fecha en que le fue reconocida la pensión de vejez hasta el momento en que se haga efectivo el pago respectivo, y ii) la pensión de vejez en forma vitalicia y transmisible a los eventuales beneficiarios de una pensión de sobrevivientes por concepto de diferencia en el valor de ambas mesadas a título de indemnización de perjuicios, sin perjuicio de la diferencia respecto de la mesada adicional de diciembre y de los incrementos de ley, debiendo reliquidar este monto anualmente, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 14 de la ley 100 de 1993, esto es, con el 100% de aumento del IPC, sin que en ningún caso pueda ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente.

Colpensiones, por su parte, solicita se confirme confirmara la providencia absolutoria.

PROBLEMA JURÍDICO

El problema jurídico de esta segunda instancia consiste en determinar si el traslado entre administradoras de pensiones del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, efectuado por el actor se torna ineficaz, y en caso afirmativo, se abordará como problema jurídico asociado, si ha operado el fenómeno extintivo de la prescripción, así como definir las restituciones a que haya lugar entre entidades pensionales, y si de ser procedente la referida ineficacia, debe condenarse a Colpensiones a seguir pagando la pensión

de vejez en favor mencionado, o en subsidio debe Protección pagar la indemnización de perjuicios en los términos solicitados.

CONSIDERACIONES

La prueba documental que milita en el expediente digital da cuenta que el señor Francisco Javier Morales Salazar: i) Se afilió al Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, el 30 de abril de 1987. ii) Que el mencionado accionante se trasladó a Protección el 29 de marzo del 2000, y continuó afiliado a dicho Fondo Privado. iii) Que reclamó la pensión por vejez, y la AFP le concedió la garantía de pensión mínima de vejez por medio de comunicado fechado el 28 de diciembre de 2017, a partir del 1º de diciembre del mismo año en cuantía de \$737.717.

Precisa la Sala, primeramente, que el traslado o afiliación a los distintos regímenes pensionales la establece el artículo 13 de la Ley 100 de 1993, disponiéndose además en los artículos 60 y 114 de dicha norma, como en los artículos 10, 12 y 15 del Decreto 720 de 1994 vigente para la época del traslado del demandante, que tal traslado debe partir de la cabal y completa asesoría jurídica que lleve a un asegurado a tomar una decisión responsable e informada, asesoría que ha de entenderse pedagógica, es decir, realmente entendible para cada persona conforme a su grado de cultura y su situación particular, pues los casos no presentan las mismas características o condiciones.

Ahora, respecto del referido acto jurídico de traslado, es posible que el mismo sea nulo, por haberse incurrido en error, fuerza o dolo, o ineficaz, cuando no se cumpla la exigencia del literal b) del artículo 13 de Ley 100 de 1993, sobre la obligatoriedad de que tal manifestación de traslado fuera libre y voluntaria, conforme la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Leída la demanda, si bien en ella se solicita que se declare la ineficacia del traslado de régimen pensional, se hace necesario analizar que en este asunto en particular se presenta una situación especial y es que, el señor Francisco Javier Morales

Salazar, como se indicó en precedentes, se encuentra pensionado por parte de Protección, desde el 1° de diciembre de 2017.

Teniendo en cuenta lo anterior, encuentra pertinente la Sala, acoger la sentencia de unificación proferida por la Sala Especializada Laboral de este Tribunal el 14 de agosto de 2019, en el proceso con radicado 05001-31-05-007-2015-01295-01, Magistrado ponente Orlando Antonio Gallo Isaza, en observación a lo previsto en el inciso último del artículo 35° del Código General del Proceso, concordante con el también último inciso del artículo 10° del Acuerdo PCSJA17-10715 del 25 de julio de 2017 del Consejo Superior de la Judicatura, con la que se fijó precedente judicial unificado con relación a la ineficacia del traslado de régimen de quien ostenta la calidad de pensionado en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, providencia en la que se anotó lo siguiente:

“Este universo fáctico descrito por la Corte no incluye a los pensionados, pues aunque una de las sentencias fundadoras de esta línea trató de un pensionado que se trasladó a PORVENIR, se trata de un caso disanalógico, no inscrito en el precedente, por cuanto se trataba de una persona expresamente excluida del régimen de ahorro individual, al tener más de 55 años a la entrada en vigencia del sistema de seguridad social integral, estando inmerso en el contenido del ordinal b) del artículo 61 de la Ley 100 de 1993.

(...)

Pero las calidades de afiliado y pensionado ya han sido deslindadas por la Corte Constitucional, precisamente en un fallo con un claro enfoque consecuenialista. Al examinar la exequibilidad del artículo 107 de la Ley 100 de 1993, que limitaba la posibilidad de los pensionados de trasladarse entre administradoras, la Corte arguyó lo que se esbozará enseguida. Esta es la disposición: Art. 107. CAMBIO DE PLAN DE CAPITALIZACIÓN O DE PENSIONES Y DE ENTIDADES ADMINISTRADORAS. Todo afiliado al régimen y que no haya adquirido la calidad de pensionado, podrá transferir voluntariamente el valor de su cuenta individual de ahorro pensional a otro plan de capitalización o de pensiones autorizado, o trasladarse a otra entidad administradora.

(...)

Tal como se señaló anteriormente, el artículo 107 de la Ley 100 de 1993 busca alcanzar al menos dos fines claramente identificables: (i) garantizar un servicio administrativo y financiero eficiente de los recursos del régimen de pensiones de ahorro individual con solidaridad; y (ii) asegurar la estabilidad financiera y la rentabilidad de las inversiones de la entidad administradora o aseguradora.

Estos dos fines están estrechamente ligados a los fines constitucionales de eficiencia, universalidad y solidaridad que orientan la prestación y ampliación de la cobertura de la seguridad social, en general, y del sistema general de pensiones, en particular. Por ello, garantizar un servicio administrativo y financiero eficiente y asegurar la estabilidad y la sostenibilidad del sistema, constituyen fines legítimos y constitucionalmente importantes en un Estado Social de Derecho como el colombiano.

(...)

Es plausible que la diferenciación de las calidades de afiliado y pensionado a partir de los argumentos que se han expuesto y de toda la legislación que claramente los diferencia, verbi gratia,

los artículos 13, literales b), e) y d), 87, 115 y 117 de la Ley 100 de 1993, permita apartarse del precedente de la Sala Laboral de la Corte sobre ineficacia de la afiliación, entendiendo que se está ante universo fáctico diverso cuando se trata de ciudadanos que ya se han pensionado.

Este Tribunal, a través de su Sala Primera de Decisión Laboral, con ponencia del Magistrado Hugo Alexander Bedoya Díaz, realizó una fértil distinción entre el momento de la afiliación y aquel en que se empieza a disfrutar la pensión, que refuerza la razonabilidad del enfoque que en el caso que nos ocupa. Dice así la providencia, con radicado 00873, proferida el 18 de septiembre de 2018, que constituye un comienzo de precedente horizontal:

Ahora, retrotrayéndonos al estudio de la improcedencia de que se declare la inexistencia del traslado en este caso en particular, la sala se remite a la sentencia SL17595-2017 con radicado 46.292 MP Dr. Fernando Castillo Cadena en donde en forma concreta se dijo “... Así, en el asunto bajo escrutinio, brilla por su ausencia, los deberes y obligaciones que la jurisprudencia ha trazado en aquellos casos de traslado entre regímenes, entre los cuales se destaca: (i) la información que comprende todas las etapas del proceso, desde la antesala de la afiliación hasta la determinación de las condiciones para el disfrute pensional; (...)”, entendiéndose con este último aparte de la providencia que si la información exigida data desde antes de la afiliación y hasta las condiciones del disfrute de la pensión, ello implica, que una vez reconocida la pensión de vejez esa falta de información se entiende superada con la celebración del nuevo acto jurídico adelantado por la afiliada y que corresponde a la solicitud de la pensión de vejez a la sociedad Porvenir S.A y al reconocimiento y pago de la prestación económica, pues solo tenía la posibilidad de alegar la falta de información previo al disfrute de la prestación económica y no con posterioridad a ella, como ocurre en este evento.

Por último, ha de reiterarse por esta Sala que sostener la tesis de la ineficacia de la afiliación para pensionados del régimen de ahorro individual es un camino que puede conducir a situaciones del todo insostenibles, por cuanto la consolidación de ese nuevo estatus supone en muchos casos la participación de terceros de buena fe, como cuando se ha optado por pensionarse bajo la modalidad de renta vitalicia y se ha contratado con una aseguradora su pago. Las palabras de la Corte Constitucional, en la mentada sentencia C-841 de 2003, acuden con autoridad para esclarecer ese reductio ad absurdum. (...).

Así mismo, ha de señalarse que, en la providencia a que se hace referencia en la Sentencia de Unificación que se trae a colación, el artículo 12 del Decreto 720 de 1994, establece que la obligación de la AFP no se ciñe solamente a la antesala del traslado, sino también: “...durante toda la vinculación y con ocasión de las prestaciones a las cuales tenga derecho el afiliado...”, regulación que permite inferir que, una vez solicitada la prestación económica de vejez ante la AFP y obtenido el disfrute pensional, la falta de información en el traslado inicial entre regímenes pensionales se refrendaría o convalidaría, ya que se trata de un nuevo acto jurídico en la que la AFP le informó que podría acceder a la garantía mínima de pensión de vejez, aspecto que no puede pasar por alto esta superioridad, pues en dicho acto, se plasma la voluntad del actor de acceder a la prestación económica, suscribiendo un nuevo acto jurídico con efectos particulares y concretos, razón por la cual, una vez comenzó el disfrute pensional a partir de diciembre de 2017, adquirió plenamente

la calidad de pensionado, y por ende, siguiendo el criterio jurisprudencial sentado por este Tribunal, se hace improcedente la declaratoria de ineficacia deprecada en la demanda.

Aunado a lo anterior, se debe tener presente que la nueva posición jurisprudencial de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ha replanteado su postura respecto la ineficacia de la afiliación del demandante pensionado en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, quien solicita previa declaración de la ineficacia de la afiliación a dicho régimen, se vuelva al mismo estado en el que se encontraba antes de su traslado, esto es, al Régimen de Prima Media con Prestación Definida.

Dicho cambio jurisprudencial consiste en que, si bien dicha Corporación ha sostenido que, por regla general, la ineficacia de la afiliación implica devolver las cosas al estado anterior, la situación varía en aquellos eventos en los cuales se adquirió la condición de pensionado y en dicho sentido indicó en la Sentencia SL 373 de 2021:

“(...) es posible volver al mismo estado en que las cosas se hallarían de no haber existido el acto de traslado (vuelta al statu quo ante), lo cierto es que la calidad de pensionado es una situación jurídica consolidada, un hecho consumado, un estatus jurídico, que no es razonable revertir o retrotraer, como ocurre en este caso. No se puede borrar la calidad de pensionado sin más, porque ello daría lugar a disfuncionalidades que afectaría a múltiples personas, entidades, actos, relaciones jurídicas, y por tanto derechos, obligaciones e intereses de terceros y del sistema en su conjunto. Basta con relevar algunas situaciones:

“(...) Desde el punto de vista de los bonos pensionales, puede ocurrir que se haya pagado el cupón principal por el emisor y las cuotas partes por los contribuyentes y, además, que dicho capital esté deteriorado en razón del pago de las mesadas pensionales. En tal caso, habría que reversar esas operaciones. Sin embargo, ello no parece factible porque el capital habría perdido su integridad y, por consiguiente, podría resultar afectada La Nación y/o las entidades oficiales contribuyentes al tratarse de títulos de deuda pública.

Desde el ángulo de las modalidades pensionales, en la actualidad las entidades ofrecen un diverso portafolio de alternativas pensionales. Algunas son retiro programado, renta vitalicia inmediata, retiro programado con renta vitalicia diferida, renta temporal cierta con renta vitalicia de diferimiento cierto, renta temporal con renta vitalicia diferida, renta temporal variable con renta vitalicia inmediata. Cada modalidad tiene sus propias particularidades. Por ejemplo, en algunas el afiliado puede pensionarse sin que importe la edad o puede contratar dos servicios financieros que le permitan acceder a una renta temporal cierta y a una renta vitalicia diferida. En otras, el dinero de la cuenta de ahorro individual es puesto en el mercado y genera rendimientos administrados por la AFP. Incluso se puede contratar simultáneamente los servicios con la AFP

y con una aseguradora en aras de mejorar las condiciones de la pensión. Es de destacar que en la mayoría de opciones pensionales intervienen en la administración y gestión del riesgo financiero, compañías aseguradoras que garantizan que el pensionado reciba la prestación por el monto acordado.

Por lo tanto, no se trata solo de revertir el acto de traslado y el reconocimiento de la pensión, sino todas las operaciones, actos y contratos con el afiliado, aseguradoras, AFP, entidades oficiales e inversionistas, según sea la modalidad pensional elegida. (...)"

Así las cosas, los argumentos expuestos en la Sentencia de Unificación de este Tribunal, como en la SL 373 de 2021 de la Corte Suprema de Justicia, concluyen que la calidad de pensionado es una situación jurídica consolidada, un hecho consumado, un estatus jurídico, que no es razonable revertir o retrotraer y que aplica cuando para el momento de proferirse la decisión judicial, la pensión ya fue reconocida y se está devengando, pues igual, la declaratoria de ineficacia del traslado daría lugar a disfuncionalidades que afectarían a múltiples personas, entidades, actos, relaciones jurídicas, y por tanto derechos, obligaciones e intereses de terceros y del sistema en su conjunto.

Corolario de lo señalado y atendiendo a las consideraciones de hecho y derecho expuestas en precedencia, se confirmará la decisión absolutoria del *a quo* en este sentido.

Luego, la parte actora en el escrito de alegatos de conclusión solicita se condene a Protección para que de manera subsidiaria reconozca y pague: i) la indemnización de perjuicios materiales por lucro cesante consolidado, suma que deberá ser indexada desde la fecha en que le fue reconocida la pensión de vejez hasta el momento en que se haga efectivo el pago respectivo, y ii) la pensión de vejez en forma vitalicia y transmisible a los eventuales beneficiarios de una pensión de sobrevivientes por concepto de diferencia en el valor de ambas mesadas a título de indemnización de perjuicios, sin perjuicio de la diferencia respecto de la mesada adicional de diciembre y de los incrementos de ley, debiendo reliquidar este monto anualmente, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 14 de la ley 100 de 1993, esto es, con el 100% de aumento del IPC, sin que en ningún caso pueda ser inferior

al salario mínimo legal mensual vigente.; pretensiones que en criterio de la Sala no resultan procedentes, por las siguientes razones.

Ha de recordarse que la demanda constituye la causa, la razón por la cual se ruega el derecho, los motivos que se tienen para pedir al Estado determinada sentencia, que por disposición del artículo 25 del Código Procesal del Trabajo, deben aparecer expresados en todo el escrito demandatorio, y surgen de los hechos del mismo, por cuanto del análisis de ellos versa la parte resolutive de la sentencia.

Adicionalmente, ha de considerarse que la Sala de Casación Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia, ha señalado que es base esencial del debido proceso laboral, que las sentencias se enmarquen en las pretensiones impetradas por la parte actora y, además, que tales resoluciones se acoplen a la causa petendi invocada por el promotor del proceso, puesto que las pretensiones, si bien delimitan los términos exactos del litigio a resolver, están conformadas por razones de hecho y de derecho (sentencia SL 911 de 9 de febrero de 2016, Radicado 53.019).

Conforme a lo decidido por el Alto Tribunal en mención, acorde al viejo aforismo *“dadme los hechos y yo os daré el derecho”*, le corresponde al juez al resolver el litigio a partir de los hechos acreditados en el plenario, subsumirlos en la norma que consagra el derecho en discusión, dado que conforme al mandato superior del artículo 230 constitucional, los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley.

Aunado a lo anterior, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha adocinado que la demanda es el escrito mediante el cual se ejerce el derecho subjetivo público de acción, es decir, se formula a la Rama Judicial del Estado la petición de que administre justicia y con tal fin decida sobre las pretensiones contenidas en ella, a través de un proceso. La demanda es la base, junto con la contestación del demandado, para el desarrollo del proceso judicial por los sujetos del mismo, o sea, el juez, las partes y los intervinientes, y, por tanto, la base para dictar la sentencia que pone fin al proceso, y tiene legalmente efectos jurídicos importantes, como

son, entre otros, la interrupción de la prescripción o la inoperancia de la caducidad, la radicación de la competencia en un determinado funcionario y la consonancia de la sentencia (Sentencia C-1069 de 3 de diciembre de 2002).

La demanda que dio origen a este proceso se instauró en contra de Protección y de Colpensiones pretendiendo se declare la ineficacia de su traslado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad administrado por Protección, y como consecuencia, se disponga el restablecimiento de su afiliación al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, administrado por Colpensiones, sin solución de continuidad, la devolución a la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones de todas las cotizaciones y rendimientos de la cuenta de ahorro individual y la validación de estos aportes por parte de Colpensiones. Se condene a Colpensiones a reconocer y pagar la pensión de vejez bajo el régimen de transición del Decreto 758 de 1990, intereses moratorios y/o indexación y costas del proceso.

No obstante, lo expuesto en los alegatos de conclusión allegados por la parte actora altera las súplicas de la demanda inicial, cambia la causa petendi de ésta, desconociendo el principio de congruencia establecido en el artículo 281 del Código General del Proceso, no habiendo lugar a decidir puntos ajenos a la controversia, pues Colpensiones, ni Protección pudieron ejercer a cabalidad los derechos de contradicción y de defensa, frente al reconocimiento de las pretensiones subsidiarias invocadas, pues se itera la Sala no podría emitir una decisión que no se encuentra ajustada a derecho, ni corresponde con la fundamentación fáctica ni con las pretensiones contenidas en el libelo demandatorio.

Así las cosas, confirmará la decisión que la Sala revisa en consulta, por las razones expuestas en esta instancia.

DE LAS COSTAS

Sin costas en esta instancia en virtud del grado jurisdiccional de consulta.

En mérito de lo expuesto, la **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley

RESUELVE

PRIMERO: Confirmar la sentencia de primera instancia que se revisa en consulta, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: Sin costas en esa instancia en virtud del grado jurisdiccional de consulta.

Lo resuelto se notifica en **EDICTO**. Se ordena regresar el proceso al Juzgado de origen.

Los Magistrados,

Jaime Alberto Aristizábal Gómez

John Jairo Acosta Pérez

Francisco Arango Torres

Firmado Por:

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **98552e771f219485e6c238cbc966d919454ab0b55fdfb6c73a84524a5c2949f6**

Documento generado en 30/05/2023 11:42:57 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>